PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RES-PLE-23-2025

FORMULA RECOMENDACIONES PRESIDENTE AGENCIA DE INNOVACIÓN APARTAMIENTOS NORMAS DE CONTRATACIÓN

jueves 13 de febrero de 2025

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

RESOLUCIÓN REGISTRADA
BAJO EL Nº 023

TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

"2025 – 60º ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS"

USHUAIA, 13 FEB. 2025

VISTO: el Expediente electrónico del registro de la Agencia de Innovación Fueguina Nº AIF-E-58790-2024 caratulado: *"RECONOCIMIENTO DE GASTO A FAVOR DEL PROVEEDOR RAYUELA S.R.L. CUIT N° 30-70880385-1 EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE DISCOS RÍGIDOS Y SSD PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN LA RED AGENCIA DE INNOVACIÓN TDF"; y*

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones del Visto tramitó el reconocimiento de gasto por la adquisición de discos rígidos y SSD para ser utilizados en el Servidor de Almacenamiento de la Red de la Agencia de Innovación Fueguina, mediante Resolución de Presidencia A.I.T.F. N° 0361/2024, de fecha 24 de julio de 2024, (orden 23) suscripta por la Presidenta del Ente, D.I. Analia Ines CUBINO, quien reconoció el gasto por la suma de pesos SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ($ 7.549.900), a favor de la firma RAYUELA S.R.L.

Que posteriormente las actuaciones fueron intervenidas en el marco del Control Posterior, mediante Acta de Constatación TCP N.° ACTA-POST-PE-346-2024 (orden 47) donde se formularon: cinco (5) incumplimientos sustanciales, un (1) incumplimiento formal, un (1) requerimiento y una (1) nota.

Que luego regresan las actuaciones con el descargo formal mediante la Nota N-SGPFyT-AIF- 400-2024 (orden 57) suscripta por la Secretaria de Gestión de Polos y Fábricas de Talentos de la citada Agencia, Señora Ema Leandra BEJARANO.

Que a raíz de ello, se emitió el Informe Contable Nº INF-TCP-SC-297-

2024 (orden 58) donde el Auditor Fiscal, C.P. Leonardo VIVAS AHUMADA manifestó: ***"(…) Análisis***

4.1. Incumplimiento sustancial

'1. Incumplimiento de la Ley Provincial N.° 1015, Artículos 7°, 14° y subsiguientes; y Ley Provincial N.° 141, Artículo 100: *atento a la falta de tramitación de un procedimiento de selección del proveedor, conducta contraria a los principios de juridicidad, concurrencia, igualdad, transparencia y publicidad que deben preservarse en todas las contrataciones públicas.*

Es importante destacar que el presente apartamiento y la omisión denotada, vician los actos administrativos involucrados que afectan a la forma, elemento esencial para la validez de todo contrato administrativo.

Otro aspecto de suma importancia prevista en la doctrina y jurisprudencia en la materia sugiere que el reconocimiento del gasto debe limitarse al monto del empobrecimiento, cubriendo los gastos desembolsados y retribuciones de los servicios prestados, descontada la supuesta ganancia. Esto significa, que únicamente se cancelan los costos que irrigó la realización de la prestación, más no cualquier ganancia que se haya generado; aspecto que no ha sido abordado en las presentes actuaciones, procediéndose a conformar y disponer la cancelación total de las facturas, sin ningún tratamiento sobre este aspecto. Además, tampoco se realiza un examen exhaustivo de los valores que se le reconoce al proveedor, teniendo en consideración que los Informes en la materia, no brindan fuentes y referencias, no demuestran los cálculos involucrados en el valor de mercado proporcionados, se emiten sin marco normativo alguno lo que implica que no se respetan pautas objetivas, claras y homogéneas, entre otros aspectos que configuran conductas contrarias a las indicadas por este Tribunal de Cuentas en la Resolución Plenaria N.° 221/2023. Por último, es importante mencionar que la falta de identificación de los responsables de esta irregularidad afecta negativamente la correcta utilización de los fondos públicos. La opacidad

en la gestión y la ausencia de responsabilidad pasibles de penalidades impiden una rendición de cuentas efectiva y pueden facilitar prácticas lesivas a la confianza de la ciudadanía en la administración pública y en la eficiencia en el uso de los recursos del Estado'.

Descargo: *'La falta de incumplimiento respecto a un procedimiento de compra según la normativa vigente, se debió a la necesidad y urgencia de contar con los discos solicitados por el área técnica, ya que nos encontrábamos en una compleja situación de vulnerabilidad de los sistemas del Gobierno y datos almacenados, ello en consecuencia del ataque cibernético sufrido a fines del mes de junio, siendo los bienes aquí tramitados, fundamentales para una rápida y eficiente solución; proporcionando además este tipo de discos, diferentes a los tradicionales, mayor confiabilidad'.*

Análisis y Conclusión: Habiéndose tomado conocimiento de lo planteado por la Secretaria de Gestión Polos y Fábricas de Talentos, Ema L. BEJARANO, cabe aclarar que los argumentos no son suficientes para considerar subsanado el apartamiento normativo verificado, ya que la figura de reconocimiento de gastos y su cancelación vía legitimo abono no es un procedimiento normado, siendo una práctica grave que desvirtúa la finalidad de los procedimientos de contratación, afectando los principios de transparencia y eficiencia.

*'2. **Incumplimiento del Decreto Provincial N.° 674/2011 - Anexo I, Artículo 34, Punto 79 y de la Resolución CGP N.° 43/2022 - Anexo 1, Punto C:** si bien consta la factura y nota de conformidad, al tratarse del pago correspondiente a un enriquecimiento sin causa, la simple conformidad de los funcionarios/agentes acerca de la prestación del servicio, sin ningún tipo de acreditación, no resulta suficiente para dar por válida y recibida la supuesta recepción de los bienes adquiridos, máxime que los mismos no cuentan con cargo patrimonial'.*

Descargo: *'Se incorpora en orden 48, remito de los bienes recibidos con la*

correspondiente verificación del área técnica. Cabe aclarar que no fue adjuntado en su momento por desconocimiento de la persona encargada de iniciar el trámite'.

Análisis y Conclusión: Atento a que se ha incorporado nueva documentación respaldando la entrega de los bienes adquiridos, se estima que la misma es suficiente para considerar el presente apartamiento normativo subsanado.

'3. ***Incumplimiento Disposición DGP N.° 01/2021 Artículo 3°:*** *atento a que la Resolución SA-AITF N.° 294/2024 que aprueba el gasto, imputa el mismo al Inciso 20000, no siendo congruente la imputación con la naturaleza de los bienes adquiridos, la cual se define en el Artículo 3° de la Disposición DGP N.° 01/2021. Respectivamente, teniendo en cuenta que se trata de bienes inventariables, corresponde registrar las altas patrimoniales y sus respectivos Cargos Patrimoniales, situación que no se ve reflejada en las actuaciones".*

Descargo: *'Al respecto obra respuesta del Subsecretario de Infraestructura Tecnológica, Sr. Rodrigo Fernando Cores, en orden 53, quien expone la imposibilidad de patrimoniar los bienes adquiridos, debido a que los mismos son componentes de un servidor informático, correspondiendo patrimoniar el servidor y no cada una de sus partes'.*

Análisis y Conclusión: Habiendo tomado conocimiento del descargo efectuado, se considera subsanado el incumplimiento sustancial.

'4. ***Incumplimiento de la Ley Provincial N.° 1015, Artículo 9°, Inciso g)****: no consta la razonabilidad de los valores de referencia proporcionados, ello en virtud de que los mismos se realizan sin brindar fuentes y referencias, no demuestran los cálculos involucrados en el valor de mercado proporcionados, se emiten sin marco normativo alguno lo que implica que no se respetan pautas objetivas, claras y*

homogéneas, entre otros aspectos que configuran conductas contrarias a las indicadas por este Tribunal de Cuentas en la Resolución Plenaria N.° 221/2023'.

Descargo: *'Se procedió a solicitar intervención a la Dirección Provincial de Redeterminación de Precios y Precios de Referencia – M.EC., obrando Informe N° 2666/202 en contenido 55. Del mismo, se deduce que los precios facturados por la firma RAYUELA S.R.L., resultan razonables, dado que la diferencia con los montos proporcionados por el área mencionada, no supera el 20%...'.*

Se incorpora a orden 53 Informe N.° 2666/2024 Letra: DPRPyPR-MEC., suscripta por el señor Lucas Román LIMA, Coordinador Provincial de Redeterminación de Precios y Precios de Referencia y el Lic. Miguel Ángel CALZADILLA SALAZAR

Análisis y Conclusión: *vista la documentación incorporada, se considera que el presente apartamiento normativo podría considerarse subsanado en la presente instancia. No obstante, cabe resaltar que aún dicha área cuenta con un manual de procedimientos sobre la construcción de los valores de referencia informados.*

*'**5. Incumplimiento de la Resolución Presidencia AITF N.° 233/2024**: atento a que no se respetó el procedimiento correspondiente tratándose de adquisición de equipamiento informático, en especial a fin de evaluarse técnicamente que lo adquirido sea lo correspondiente'.*

Descargo: *'Se informa que el pedido de los bienes fue realizado por el área técnica, según consta en Nota N° 59/2024 Letra SSD-SsIT, adunada a orden 50 (copia) y a orden 56.*

La misma no se incorporó anteriormente debido a que no le fue proporcionada a la persona que inició el trámite, ello por un error involuntario debido a que nos encontrábamos abocados a la resolución de la situación que estábamos atravesando.

Asimismo, puede observarse en remito incorporado en orden 48, la verificación técnica del Director Provincial de Soporte y Asistencia Técnica, Sr. Francisco Nicolás Quinteros, dependiente de la Secretaría de Servicios Digitales´.

Análisis y Conclusión: *Teniendo en cuenta la documental aportada, se da por subsanado el incumplimiento sustancial, dejando saber que para futuras actuaciones se deberá dar estricto cumplimiento a los momentos de intervención pautados por la norma citada, a los efectos de evitar nuevos incumplimientos (…)".*

Que seguidamente, mediante Nota Interna N° NOTA-INT-SC-2096-2024 del 16 de diciembre de 2024 (orden 59), el Auditor Fiscal a cargo de la Secretaría Contable, C.P. David Ricardo BEHRENS, solicitó la intervención de la Secretaría Legal a los efectos de que se expida sobre lo informado por el Auditor Fiscal CP Leonardo VIVAS AHUMADA en el informe que antecede.

Que a raíz de ello, la Asesora Letrada, Dra. María Belén URQUIZA, emitió el Dictamen Legal N° DICT-SL-AL-215-2024 (orden 61), en el cual expuso lo siguiente:

"(…) ***ANÁLISIS***

En primer lugar, cabe tener presente que las actuaciones ingresaron a esta Secretaría Legal en el marco del Control Posterior, aplicándose así la Resolución Plenaria N° 122/2018 que aprueba el procedimiento respectivo.

Esta, en sus considerandos indica: '(...) Que este tipo de control, se vincula con el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial y el ejercicio de la potestad sancionatoria (...)'.

Además, en su parte pertinente reza: '(...) ***1.1.1 Incumplimientos formales:*** *Son aquellos incumplimientos administrativos que por sí mismos no constituyen perjuicio al erario público provincial* (...). ***1.1.2 Incumplimientos sustanciales:*** *Se vinculan con incumplimientos y faltas graves que podrían traer*

aparejado un perjuicio al erario público o un grave apartamiento normativo no incluido en ***1.1.1.*** *(...)* ***1.4.2 No subsanación de deficiencias sustanciales:*** *En caso de que no se hubieran subsanado los incumplimientos administrativos advertidos en la Acta de Constatación del punto 1.3., el Auditor Fiscal elevará a la Secretaría Contable dentro del plazo de tres (3) días un Informe en donde expondrá de manera clara y fundada:* ***1.4.2.1 Distinción de incumplimientos formales y sustanciales:*** *Deberá diferenciar los incumplimientos formales de aquellos que revisten el carácter de sustanciales.* ***1.4.2.2 Normativa incumplida:*** *Indicar cuál es la norma o las normas transgredidas.* ***1.4.2.3 Acto Administrativo:*** *A través de qué actos y/u omisiones se produce la transgresión el incumplimiento y/o daño.* ***1.4.2.4 Agentes responsables:*** *Indicar quién/es es/son el/los agente/s o funcionario/s responsable/s en función de las actuaciones'.*

Antes de proceder al análisis particular de los Incumplimientos Sustanciales, estimo correspondería determinar las pautas temporales para la aplicación de eventuales sanciones por parte de este Tribunal.

Sobre este punto '(...) cabe destacar que la potestad sancionatoria de este Órgano de Control, encuentra su fundamento en la necesidad de cumplimentar con su cometido sobre los organismos que se encuentran bajo su fiscalización (conf. Superior Tribunal de Justicia en 'Aguirre' y 'Toledo Zulmelzu').

Conforme los lineamientos seguidos por el Superior Tribunal de Justicia, en el fallo 'Blazquez, Daniel c/ Tribunal de Cuentas de la Provincia s/ Contencioso Administrativo', se sienta el criterio relativo a fijar el dies a quo de la potestad sancionatoria, a partir del día siguiente de la publicación del acto o del ingreso de las actuaciones a este Órgano de Control, lo que suceda primero en el tiempo.

Asimismo, en los autos caratulados: 'Tribunal de Cuentas c/ Santamaría, Felix Alberto si Ejecutivo', del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial Sur, se fijó la pauta en función de la cual el plazo del artículo 75 era aplicable no sólo para la acción de responsabilidad patrimonial, sino también para la aplicación de multas a los agentes estatales, toda vez que ambos supuestos se desprenden de la interpretación del artículo 44 de la citada ley.

La mentada jurisprudencia fue adoptada por el Cuerpo de Miembros de este Tribunal de Cuentas mediante el Acuerdo Plenario N° 1744 (…)' (Informe Legal N.º 192/2021 Letra: TCP-CA).

Así, teniendo en cuenta que el ingreso de las actuaciones a este Organismo -conforme surge del sistema GEN EXPEDIENTE- ocurrió el 23 de octubre de 2024, aún no se encontrarían excedidas las pautas temporales para ejercer las atribuciones conferidas por la Ley provincial N.º 50.

Máxime, en razón de que la Resolución S.A.-A.I.T.F. N° 294/2024 (que aprueba el gasto y ordena pagar –orden 34) fue suscripta el 31 de julio de 2024, por lo que incluso tomando como fecha la publicación del mentado acto administrativo (que nunca puede ser anterior a su suscripción), no se modificaría lo afirmado en el apartado anterior.

Dicho esto, en el supuesto en particular y conforme lo analizado en el Informe N.º INF-TCP-SC-297-2024, nos hallamos frente a cinco (5) Incumplimientos de carácter Sustancial, de los cuales cuatro (4) –Incumplimientos Sustanciales N°2, 3, 4 y 5- fueron subsanados por lo que me limitaré a examinar sólo el Incumplimiento Sustancial N° 1.

*El **Incumplimiento Sustancial N° 1** dice: "**Incumplimiento de la Ley Provincial N° 1015, Artículos 7°, 14° y subsiguientes; y Ley Provincial N° 141, Artículo 100:** atento a la falta de tramitación de un procedimiento de selección del proveedor, conducta contraria a los principios de juridicidad, concurrencia, igualdad, transparencia y publicidad que deben preservarse en todas las contrataciones públicas.*

Es importante destacar que el presente apartamiento y la omisión denotada, vician los actos administrativos involucrados que afectan a la forma, elemento esencial para la validez de todo contrato administrativo.

Otro aspecto de suma importancia prevista en la doctrina y jurisprudencia en la materia sugiere que el reconocimiento del gasto debe limitarse al monto del empobrecimiento, cubriendo los gastos desembolsados y retribuciones de los servicios prestados, descontada la supuesta ganancia. Esto significa, que únicamente se cancelan los costos que irrigo la realización de la prestación, mas no cualquier ganancia que se haya generado; aspecto que no ha sido abordado en las presentes actuaciones, procediéndose a conformar y disponer la cancelación total de las facturas, sin ningún tratamiento sobre este aspecto. Además, tampoco se realiza un examen exhaustivo de los valores que se le reconoce al proveedor, teniendo en consideración que los Informes en la materia, no brindan fuentes y referencias, no demuestran los cálculos involucrados en el valor de mercado proporcionados, se emiten sin marco normativo alguno lo que implica que no se respetan pautas objetivas, claras y homogéneas, entre otros aspectos que configuran conductas contrarias a las indicadas por este Tribunal de Cuentas en la Resolución Plenaria N.° 221/2023. Por último, es importante mencionar que la falta de identificación de los responsables de esta irregularidad

afecta negativamente la correcta utilización de los fondos públicos. La opacidad en la gestión y la ausencia de responsabilidad pasibles de penalidades impiden una rendición de cuentas efectiva y pueden facilitar practicas lesivas a la confianza de la ciudadanía en la administración pública y en la eficiencia en el uso de los recursos del Estado'.

En primer lugar, se comparte el criterio vertido por el Auditor Fiscal respecto de la falta de tramitación de un procedimiento administrativo, lo que fue aceptado por la Secretaria de Gestión Polos y Fábricas de Talentos de la Agencia de Innovación Fueguina, Ema Leandra BEJARANO a través de la NOTA-N-SGPFyT-AIF-400-2024, en que manifestó lo siguiente: 'La falta de incumplimiento respecto a un procedimiento de compra según la normativa vigente, se debió a la necesidad y urgencia de contar con los discos solicitados por el área técnica, ya que nos encontrábamos en una compleja situación de vulnerabilidad de los sistemas del Gobierno y datos almacenados, ello en consecuencia del ataque cibernético sufrido a fines del mes de junio, siendo los bienes aquí tramitados, fundamentales para una rápida y eficiente solución; proporcionando además este tipo de discos, diferentes a los tradicionales, mayor confiabilidad' (el resaltado me pertenece).

Entonces, reconocida la falta por el cuentadante, entiendo en esta instancia, que no resultaría necesario mayor análisis sobre esta temática.

Ahora, en relación a la figura del Reconocimiento del Gasto, este Tribunal de Cuentas, se ha pronunciado sobre el pago realizado por el Estado provincial de prestaciones recibidas sin haberse llevado a cabo el procedimiento requerido por la norma, remarcado lo esencial del elemento forma y la posibilidad de que, ante la inexistencia de este, se reconozca el derecho del proveedor con fundamento en la teoría del enriquecimiento sin causa.

En este supuesto en particular, se abonó una factura en concepto de la adquisición de Discos Rígidos y SSD para ser utilizados en el Servidor de Almacenamiento en la Red de la Agencia de Innovación Fueguina, a la firma RAYUELA S.R.L., sin haberse llevado a cabo un procedimiento de contratación para seleccionar al proveedor.

Lo anterior, conforme surge de la Nota Fundada N° 155/2024 Letra: S.G.P. y F.T - A.I.T.F., suscripta por la Secretaria de Gestión Polos y Fabrica de Talentos Agencia de Innovación, Ema BEJARANO, en razón de que 'Recientemente, la Agencia de Innovación de la Provincia sufrió un ataque de gran amplitud, causando así, la caída de gran parte de nuestros sistemas. Este incidente deshabilito nuestras capacidades operativas comprometiendo la disponibilidad de los servicios y la integridad de los datos almacenados.

Dichos ataques han provocado fallos en el hardware existente y han resaltado la necesidad de mejorar nuestra infraestructura. La implementación de discos adicionales permita configurar esquemas de redundancia (RAID), mejorando así la integridad y seguridad de los datos almacenados y reduciendo la vulnerabilidad ante ataques futuros.

Los discos SATA de 16TB proporcionarán la capacidad necesaria para manejar el creciente volumen de datos, colaborando con el sistema de respaldo de datos actual; mientras que los discos SSD mejorarán el rendimiento del sistema operativo de nuestro NAS, debido a su alta velocidad de lectura/escritura, lo que garantiza un arranque rápido y un funcionamiento eficiente del sistema, siendo además menos propenso a fallos mecánicos comparados con los discos duros

tradicionales, lo que asegura mayor confiabilidad y tiempo de actividad del sistema (…)'.

*En este sentido, el Tribunal de Cuentas, por Resolución Plenaria N° 126/2022 -entre otras- dijo: '(…) la Constitución de la Provincia determina en su artículo 74 que: 'Las contrataciones del Estado Provincial o de los municipios se efectuarán según sus leyes u ordenanzas específicas en la materia, mediante el **procedimiento de selección y una previa, amplia y documentada difusión**' (el resaltado me pertenece).*

Siendo el procedimiento adecuado la licitación pública o privada, ante la exigencia de la norma, la doctrina imperante sobre el tema es constante respecto a los supuestos excepcionales en los cuales se prescinde de ella para contratar en forma directa, solicitando: '(...) el dictado de un acto administrativo motivado en el que se consignen, con sustento fáctico y jurídico suficiente, las razones que inducen a acudir a él (...)' (REITMAN FARAH, Mario, Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, Abeledo Perrot, Buenos Aires, págs. 57y 61).

Este extremo no se encuentra acreditado, en violación evidente de los principios consagrados por el artículo 3° de la Ley provincial N° 1015, que son aplicables tanto a los contratos administrativos originados en un proceso de licitación como a los nacidos de una contratación directa.

Como contraparte, el régimen actual de contrataciones públicas ha consagrado como principio de todo contrato administrativo la responsabilidad del funcionario público. 'Corresponderá entonces, en los casos de habilitarse contrataciones que omiten la observancia de algún principio -como ocurre con la concurrencia, la competencia y la igualdad en la contratación directa- darle

mayor peso a la responsabilidad para, de esa manera, equilibrar la balanza' (Jorge ALBERTSEN, 'Cuestiones de la Contratación Directa' en Cuestiones de Contratos Administrativos en Homenaje a Julio Rodolfo COMADIRA, Ediciones Rap, págs. 535/537).

En función de tales preceptos doctrinarios y la normativa aplicable, cabe concluir que la falta de contratación previa no exime totalmente a la Administración de la obligación de pago, aunque sí procede equilibrar la gravedad de las violaciones a los principios rectores de las contrataciones del Estado, a través del reproche debido a los funcionarios responsables de tales conductas.

Por lo expuesto, dichos pagos tendrán su fundamento en la figura del enriquecimiento sin causa y no en un vínculo contractual.

El fundamento de ello es que la Administración no podría enriquecerse ilegítimamente de una prestación percibida -aún en el marco de la irregularidad en la que fue desarrollada la contratación- y no el reconocimiento del gasto, que no encuentra amparo normativo alguno, ni posee la virtualidad suficiente para subsanar lo actuado (conf. Acuerdos Plenarios N° 2354 y 2370, entre otros) (…)' (el subrayado no se corresponde al original).

Además, respecto de la Teoría del Enriquecimiento Sin Causa, este Tribunal ha sostenido que: '(…) la Doctrina tiene dicho que: '(...) 6.3. Caso 'Ingeniería Omega': el enriquecimiento sin causa como fuente de la obligación

La última sentencia del año 2000 trajo novedades en la materia, pues,

además de tratarse la inexistencia del contrato, se hizo mención a la posibilidad de reconocer el derecho del contratista con fundamento en la teoría del enriquecimiento sin causa.

La Cámara Civil había confirmado un fallo de primera instancia que condenó al actual Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al pago de una suma de dinero por los trabajos, reparaciones y suministros efectuados por la actora en el Hospital Cosme Argerich. Fundamentó la procedencia de ese pago en la teoría del enriquecimiento sin causa.

(...) sería dable inferir de este precedente que si el contratista sostuviere como fuente de su derecho el enriquecimiento sin causa, debería iniciar una acción específicamente destinada a probarlo (y no una de cobro de pesos o reconocimiento de derechos emanados del contrato, pues éste no existe) o bien, al menos, invocar en subsidio el enriquecimiento en la acción por incumplimiento contractual, con la carga de acreditar tanto el enriquecimiento del contratante como el empobrecimiento propio.

Merece recordarse, a efectos de ubicarnos sumariamente en el instituto del enriquecimiento sin causa, que la doctrina privatista ha reconocido que éste es fuente de obligaciones y fundamentos de la acción por restitución; que no es admisible cuando la ley otorga al empobrecido otros medios para ser indemnizado y que son requisitos indispensables para su procedencia: a) el enriquecimiento del demandado, b) el empobrecimiento del actor, c) el nexo causal entre empobrecimiento y enriquecimiento y d) la falta de causa lícita que justifique el enriquecimiento. Asimismo, el límite de la restitución viene dado por el enriquecimiento o por el empobrecimiento, el que resulte menor.

(...) Como es dable observar, el enriquecimiento sin causa constituye

una fuente de obligaciones de carácter subsidiario o residual, por lo que el actor no debe contar con otro medio o acción para obtener la indemnización. Además, en el plano sustancial, exige acreditar el enriquecimiento, el empobrecimiento y la relación de causalidad, alcanzando la restitución sólo al que resulte menor.

Por último, a nuestro juicio es razonable el requisito de la ausencia de mala fe o culpa en el empobrecido, aunque estimamos que la presunción de conocimiento del vicio debe ser solo iuris tantum y refutable por prueba en contrario.

Entendemos que no es dable, pues, predicar una ecuación necesaria entre la condición de contratista y la de especialista en el conocimiento de los trámites y procedimientos estatales, dependiendo ello de factores diversos que deberán ser sopesados en cada caso por los tribunales. (...)' [CANDA, Fabián O., 'La importancia del elemento forma en el contrato administrativo (Consecuencias de su omisión en la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación)', en la obra colectiva Cuestiones de Contratos Administrativos, en Homenaje a Julio Rodolfo Comadira, Jornadas organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Ed. RAP, Buenos Aires, 2007-].

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el servicio fue prestado efectivamente, conforme las constancias que obran en cada uno de los expedientes por esa razón aún cuando no existe contratación previa, de todas maneras correspondería efectuar el pago en función de la teoría del enriquecimiento sin causa.

En referencia a ello, mediante Acuerdo Plenario 2370 se dijo: 'en relación con la procedencia de los pagos cuando de las actuaciones surgiesen

verificadas las prestaciones, aun en el supuesto de la inexistencia de contrato, con base a la figura del enriquecimiento sin causa en favor del Estado, este Organismo de Control se ha expedido a través de la Resolución Plenaria N° 226/12, en que se indicó:

'En relación con la figura del enriquecimiento sin causa en el marco de los contratos administrativos y su relación con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en sus precedentes, entre ellos, la causa 'Ingeniería Omega', cabe hacer referencia a la exposición realizada por la Dra. Laura MONTI (Procuradora ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación) en el marco de las XXIII Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo celebradas en la ciudad de Mendoza en el año 2007, quien al respecto (...) hizo referencia a una causa más reciente 'Cardiocorp' indicando al respecto que: 'la Corte en su composición actual tuvo opiniones divergente sobre el tema, a saber: a) corresponde pagar a quien realizó prestaciones a la Administración sobre la base del enriquecimiento sin causa; b) debe seguirse, en lo sustancial, la jurisprudencia que surge del caso 'Ingeniería Omega'; c) la sentencia de cámara que reconoció la responsabilidad estatal con base en la institución citada queda firme, por aplicación de la fórmula del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación'.

De lo expuesto se deduce, como señalamos al principio, que la Corte sigue considerando que es posible fundar una acción de responsabilidad estatal en el enriquecimiento sin causa de los órganos públicos'.

Una vez sentado ello, señaló: '...Este reconocimiento no implicará eludir sino, antes bien, sancionar a los funcionarios que, eventualmente, pueden haber intervenido …'

Así las cosas, en base al análisis efectuado, resulta dable concluir que resulta viable cancelar el pago en favor de los particulares cuando, a pesar de no haberse suscripto un convenio, resulte acreditada la efectiva contraprestación en favor de la Administración. Sin embargo dichos pagos tendrán su fundamento en la figura del enriquecimiento sin causa y no en un vínculo contractual' (…)' (el subrayado no se corresponde con el original).

El en caso bajo análisis, parecería ser que el servicio efectivamente se habría prestado -conforme las constancias que obran en el expediente y corroborado por el Auditor Fiscal al tener por subsanado el Incumplimiento Sustancial N° 2-, por lo que, aun habiéndose llevado a cabo sin seguir el procedimiento de contratación estipulado en la norma, entiendo que correspondería enmarcar el pago realizado al proveedor RAYUELA S.R.L., en la teoría del enriquecimiento sin causa.

Además, de los antecedentes surge acreditada prima facie, la premura en la Agencia de Innovación Fueguina de contar con los insumos ante las situaciones acontecidas en dicha repartición, cual fue, el ataque cibernético sufrido que generó una situación de vulnerabilidad de los sistemas del Gobierno y datos almacenados.

Tal se desprende de la Nota N° 59/2024 Letra: SSD-SsIT (orden 50) en dicho ataque '(…) se vieron comprometidos gran parte de los servicios suministrados por esta Secretaría, reduciendo nuestras capacidades operativas, y provocando fallos en nuestro hardware actual, más precisamente en nuestro servidor NAS (Servidor de Almacenamiento en la red) quedando inoperativo (…)'.

Por lo que amén de verificarse la falta de procedimiento de contratación, esta situación imprevisible acaecida con las consecuencias que generó, sumado a la rápida respuesta del proveedor ante esta situación de crisis, teniendo en cuenta que muchos servicios esenciales dependen del sistema informático, entiendo que por razones de equidad correspondería pagar su totalidad y no sólo el empobrecimiento del proveedor.

En virtud de lo expuesto precedentemente, se comparte el criterio vertido en el Informe Contable N.° INF-TCP-SC-297-2024, en el que se concluyó que el incumplimiento normativo detectado, '(…) no resulta suficiente para cuantificar un posible perjuicio al erario provincial en esta instancia'.

Finalmente, se sugiere que, en caso de compartir el Cuerpo Plenario de Miembros el criterio aquí vertido, y en el marco de las facultades del artículo 4° inciso g) de la Ley provincial N° 50, se ponga en conocimiento de lo aquí analizado a las autoridades correspondientes, a fin de que en el futuro eviten incurrir en apartamientos normativos como los advertidos en las presentes actuaciones.

CONCLUSIÓN

Como corolario de lo expuesto, respecto del Incumplimiento Sustancial N° 1, se comparte el criterio vertido por el Auditor Fiscal interviniente sobre la falta de tramitación de un procedimiento de selección del proveedor del servicio.

Así, en base a la normativa, la Doctrina y la Jurisprudencia arriba analizada, dado que de las constancias obrantes en el expediente y de lo actuado por el Auditor Fiscal al tener por subsanado el Incumplimiento Sustancial N° 2, se desprende que el servicio se habría prestado, se comparte el criterio vertido en

el Informe Contable N° INF-TCP-SC-297-2024, correspondiendo encuadrar el pago realizado al proveedor 'RAYUELA S.R.L.', en la teoría del enriquecimiento sin causa.

Además, de los antecedentes surge acreditada prima facie, la premura en la Agencia de Innovación Fueguina de contar con los insumos ante las situaciones acontecidas en dicha repartición, cual fue, el ataque cibernético sufrido que generó una situación de vulnerabilidad de los sistemas del Gobierno y datos almacenados.

Por ello, amén de verificarse la falta de procedimiento de contratación, esta situación imprevisible acaecida con las consecuencias que generó, sumado a la rápida respuesta del proveedor ante esta situación de crisis, teniendo en cuenta que muchos servicios esenciales dependen del sistema informático, entiendo que por razones de equidad correspondería pagar su totalidad y no sólo el empobrecimiento del proveedor.

Finalmente, atento a lo indicado por el Auditor Fiscal interviniente, quien concluyó en el Informe Contable N.º INF-TCP-SC-297-2024 que el incumplimiento normativo detectado '(…) no resulta suficiente para cuantificar un posible perjuicio al erario provincial en esta instancia", se sugiere que, en caso de compartir el Cuerpo Plenario de Miembros el criterio aquí vertido y en el marco de las facultades del artículo 4° inciso g) de la Ley provincial N° 50, se ponga en conocimiento de lo aquí analizado a las autoridades correspondientes, a fin de que en el futuro eviten incurrir en apartamientos normativos como los advertidos en las presentes actuaciones (…)".

Que con posterioridad, el Secretario Legal a cargo, Dr. Pablo GENNARO, comparte el Dictamen Legal TCP-SL-AL N° 215/24 vertido por la Dra. Belén Urquiza, remitiendo los actuados a la Secretaría Contable, a los fines de la continuidad del trámite (orden 62).

Que en función de lo expuesto, el Prosecretario Contable, C.P. Mauricio IRIGOITIA, emite el Informe Contable N° INF-TCP-SC-12-2025 (orden 63), a los fines de su elevación a la Vocalía de Auditoría, en la cual expresa lo siguiente:

"(…) 4. Análisis y Conclusión

Así las cosas, ante los hechos expuestos, y en atención al análisis realizado por las distintas áreas de este Órgano de Control, esta instancia atento a lo indicado por la Secretaría Legal de este Organismo de Control y lo actuado mediante el informe contable antes citado, considera que subsiste el incumplimientos sustancial N.° 1 detectado en el expediente de la referencia.

Normativa incumplida:

- *Ley Provincial N.° 1.015, Artículos 7°, 14 y subsiguientes.*
- *Ley Provincial N.° 141, Artículo 99, Inciso a), y Artículo 100.*

Actos administrativos:

- *Resolución Presidencia AITF N.° 361/2024: reconoce el gasto en concepto de la adquisición de Discos Rígidos y SSD para ser utilizados en el Servidor de Almacenamiento en la Red. Firmado digitalmente por la DI Analía Inés CUBINO.*
- *Resolución SA-AITF N.° 294/2024: aprueba el gasto derivado de la Factura tipo "B" N.° 0050-00331960 por la suma de $7.549.900,99 en concepto de la adquisición de Discos Rígidos y SSD para ser utilizados en el Servidor de Almacenamiento en la Red. Ordena pagar la suma mencionada al proveedor RAYUELA SRL. Firmado digitalmente por la Abogada Mariángeles ARROYO.*

Agentes y/o funcionarios responsables:

- *Presidenta de la Agencia de Innovación, D.I. Analía Inés CUBINO: quien*

suscribió el acto administrativo de reconocimiento de gastos, teniendo conocimiento que se obstó del correspondiente procedimiento administrativo.

- *Secretaria Administrativa – AITF, Abog. Mariángeles ARROYO: quien suscribió el acto administrativo que aprueba el gasto y autoriza el pago sin que previamente se haya acreditado la efectiva entrega de los bienes.*

Presunto perjuicio fiscal:

Se deja constancia de que el incumplimiento sustancial detectado, no resulta suficiente para cuantificar un posible perjuicio al erario provincial en esta instancia.

Sin otro particular, elevo a su consideración un ejemplar del presente informe junto al expediente de referencia, considerando que estarían dadas las condiciones, salvo mejor y elevado criterio del Cuerpo Plenario de Miembros, se sugiere que, efectuar en el marco de las facultades del artículo 4° inciso g) de la Ley provincial N.° 50, se ponga en conocimiento de lo aquí analizado a las autoridades correspondientes, a fin de que en el futuro eviten incurrir en apartamientos normativos como los advertidos en las presentes actuaciones¨.

Que los suscriptos comparten y hacen propios los términos del Informe Contable Nº INF-TCP-SC-297-2024, el Dictamen Legal N° DICT-SL-AL-215-2024 y el Informe Contable N° INF-TCP-SC-12-2025.

Que a raíz de los informes mencionados, se estima pertinente, en el marco del artículo 4° inciso g) de la Ley provincial N.º 50, efectuar una recomendación a la Presidenta de la Agencia de Innovación Fueguina, D.I. Analía Inés CUBINO y por su intermedio a la Secretaria Administrativa del Ente mencionado, Abog. Mariángeles ARROYO, a fin que en el futuro eviten incurrir en los apartamientos normativos advertidos en las presentes actuaciones,

observando de modo estricto la normativa provincial que rige en materia de contrataciones públicas.

Que la presente se emite con el *quorum* previsto en el artículo 27 de la Ley provincial Nº 50, en virtud de lo dispuesto en la Resolución Plenaria Nº 28/2024 y la Resolución Plenaria N° 2/2025, esta última, modificada por su similar N° 7/2025.

Que los suscriptos se encuentran facultados para emitir el presente acto en virtud de lo dispuesto por los artículos 2°, 4° inciso g), 27 siguientes y concordantes de la Ley provincial N° 50.

Por ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar y hacer propios los términos del Informe Contable Nº INF-TCP-SC-297-2024, el Dictamen Legal N° DICT-SL-AL-215-2024 y el Informe Contable N° INF-TCP-SC-12-2025, que forman parte integrante de la presente. Ello, en virtud de los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Recomendar, en el marco del artículo 4° inciso g) de la Ley provincial N.º 50, a la Presidenta de la Agencia de Innovación Fueguina, D.I. Analía Inés CUBINO y a la Secretaría Administrativa del Ente mencionado, Abog. Mariángeles ARROYO, a fin que en el futuro eviten incurrir en los apartamientos normativos advertidos en las presentes actuaciones, observando de modo estricto la normativa provincial que rige en materia de contrataciones públicas.

ARTÍCULO 3°.- Notificar con copia certificada de la presente a la Presidenta de la Agencia de Innovación Fueguina, D.I. Analía Inés CUBINO, con remisión de las actuaciones, y a la Secretaria Administrativa del Ente mencionado, Abog. Mariángeles ARROYO.

ARTÍCULO 4°.- Notificar en sede del Organismo al Auditor Fiscal y Prosecretario Contable a cargo de la Secretaría Contable, C.P. Mauricio

IRIGOITIA y por su intermedio al Auditor Fiscal interviniente, y al Secretario Legal a cargo de la Secretaría Legal Dr. Pablo E. GENNARO y por su intermedio a la letrada dictaminante.

ARTÍCULO 5°.- Registrar, publicar. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN PLENARIA Nº 023 **/2025.**

Dra. CLAUDIA M. BECERRA
Abogada
T° 70 F° 334
MAT S.T.J. N° 77

C.P.N. Hugo S. PANI
Vocal de Auditoría
Presidente a/c
Tribunal de Cuentas de la Provincia

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

"2024 - 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

Acta de Constatación N.° INF-TCP-SC-297-2024

Ref.: *"Reconocimiento de gasto a favor del proveedor RAYUELA S.R.L CUIT N° 30-708800385-1*

lunes 16 de diciembre de 2024

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

INFORME CONTABLE
Control Posterior

INFORME CONTABLE

Letra: TCP-PE

REF.: AIF-E-58790-2024 caratulado: *"Reconocimiento de gasto a favor del proveedor RAYUELA S.R.L CUIT N° 30-70880385-1 en concepto de adquisición de Discos rígidos y SSD para ser utilizados en el Servidor de Almacenamiento en la Red - Ag..."*

MONTO: $ 7.549.900,00

ÁREA GENERADORA: Secretaría de Gestión Polos y Fabricas de talentos – AITF.

Auditor Fiscal: C.P. Leonardo VIVAS AHUMADA

Índice

1. Destinatario **1**

2. Objeto **1**

3. Antecedentes **1**

4. Análisis **1**

4.1 Incumplimiento sustancial 1

4.2 Incumplimiento formal. 6

4.3 Requerimientos: 6

5. Conclusión **6**

1. Destinatario

El presente informe está dirigido a la Secretaría Contable.

2. Objeto

Se elevan las presentes actuaciones en el marco del Control Posterior, ante la no subsanación de deficiencias sustanciales detectadas, conforme lo previsto en la Resolución Plenaria N.° 122/2018 – Anexo I, Punto 1.4.2.

3. Antecedentes

Mediante el expediente de la referencia se ha tramitado el reconocimiento de gastos por la adquisición de Discos rígidos y SSD para ser utilizados en el Servidor de Almacenamiento en la Red de la Agencia de Innovación.

Se han detectado cinco incumplimientos sustanciales, un incumplimiento formal y se efectuó un requerimiento, los cuales fueron plasmados en el Acta de Constatación ACTA-POST-PE-346-2024.

El expediente regresa a este Tribunal con los descargos pertinentes, mediante N-SGPFyT-AIF-400-2024 del 03/12/2024 suscripta por la Secretaria de Gestión Polos y Fábricas de Talentos, Ema L. BEJARANO.

Así, los distintos apartamientos se expondrán a continuación, junto a sus descargos, análisis y conclusión correspondiente.

4. Análisis

4.1 Incumplimiento sustancial

*"1. **Incumplimiento de la Ley Provincial N.° 1015, Artículos 7°, 14° y subsiguientes; y Ley Provincial N.° 141, Artículo 100:** atento a la falta de tramitación*

de un procedimiento de selección del proveedor, conducta contraria a los principios de juridicidad, concurrencia, igualdad, transparencia y publicidad que deben preservarse en todas las contrataciones públicas.

Es importante destacar que el presente apartamiento y la omisión denotada, vician los actos administrativos involucrados que afectan a la forma, elemento esencial para la validez de todo contrato administrativo.

Otro aspecto de suma importancia prevista en la doctrina y jurisprudencia en la materia sugiere que el reconocimiento del gasto debe limitarse al monto del empobrecimiento, cubriendo los gastos desembolsados y retribuciones de los servicios prestados, descontada la supuesta ganancia. Esto significa, que únicamente se cancelan los costos que irrigó la realización de la prestación, más no cualquier ganancia que se haya generado; aspecto que no ha sido abordado en las presentes actuaciones, procediéndose a conformar y disponer la cancelación total de las facturas, sin ningún tratamiento sobre este aspecto. Además, tampoco se realiza un examen exhaustivo de los valores que se le reconoce al proveedor, teniendo en consideración que los Informes en la materia, no brindan fuentes y referencias, no demuestran los cálculos involucrados en el valor de mercado proporcionados, se emiten sin marco normativo alguno lo que implica que no se respetan pautas objetivas, claras y homogéneas, entre otros aspectos que configuran conductas contrarias a las indicadas por este Tribunal de Cuentas en la Resolución Plenaria N.° 221/2023. Por último, es importante mencionar que la falta de identificación de los responsables de esta irregularidad afecta negativamente la correcta utilización de los fondos públicos. La opacidad en la gestión y la ausencia de responsabilidad pasibles de penalidades impiden una rendición de cuentas efectiva y pueden facilitar prácticas lesivas a la confianza de la ciudadanía en la administración pública y en la eficiencia en el uso de los recursos del Estado."

Descargo: *"La falta de incumplimiento respecto a un procedimiento de compra según la normativa vigente, se debió a la necesidad y urgencia de contar con los*

discos solicitados por el área técnica, ya que nos encontrábamos en una compleja situación de vulnerabilidad de los sistemas del Gobierno y datos almacenados, ello en consecuencia del ataque cibernético sufrido a fines del mes de junio, siendo los bienes aquí tramitados, fundamentales para una rápida y eficiente solución; proporcionando además este tipo de discos, diferentes a los tradicionales, mayor confiabilidad.".

Análisis y Conclusión: Habiéndose tomado conocimiento de lo planteado por la Secretaria de Gestión Polos y Fábricas de Talentos, Ema L. BEJARANO, cabe aclarar que los argumentos no son suficientes para considerar subsanado el apartamiento normativo verificado, ya que la figura de reconocimiento de gastos y su cancelación vía legitimo abono no es un procedimiento normado, siendo una práctica grave que desvirtúa la finalidad de los procedimientos de contratación, afectando los principios de transparencia y eficiencia.

*"2. **Incumplimiento del Decreto Provincial N.° 674/2011 - Anexo I, Artículo 34, Punto 79 y de la Resolución CGP N.° 43/2022 - Anexo 1, Punto C:** si bien consta la factura y nota de conformidad, al tratarse del pago correspondiente a un enriquecimiento sin causa, la simple conformidad de los funcionarios/agentes acerca de la prestación del servicio, sin ningún tipo de acreditación, no resulta suficiente para dar por válida y recibida la supuesta recepción de los bienes adquiridos, máxime que los mismos no cuentan con cargo patrimonial.".*

Descargo: *"Se incorpora en orden 48, remito de los bienes recibidos con la correspondiente verificación del área técnica. Cabe aclarar que no fue adjuntado en su momento por desconocimiento de la persona encargada de iniciar el trámite."*

Análisis y Conclusión: Atento a que se ha incorporado nueva documentación respaldando la entrega de los bienes adquiridos, se estima que la misma es suficiente para considerar el presente apartamiento normativo subsanado.

*"3. **Incumplimiento Disposición DGP N.° 01/2021 Artículo 3°:** atento a que la Resolución SA-AITF N.° 294/2024 que aprueba el gasto, imputa el mismo al Inciso 20000, no siendo congruente la imputación con la naturaleza de los bienes adquiridos, la cual se define en el Artículo 3° de la Disposición DGP N.° 01/2021. Respectivamente, teniendo en cuenta que se trata de bienes inventariables, corresponde registrar las altas patrimoniales y sus respectivos Cargos Patrimoniales, situación que no se ve reflejada en las actuaciones.".*

Descargo: *"Al respecto obra respuesta del Subsecretario de Infraestructura Tecnológica, Sr. Rodrigo Fernando Cores, en orden 53, quien expone la imposibilidad de patrimoniar los bienes adquiridos, debido a que los mismos son componentes de un servidor informático, correspondiendo patrimoniar el servidor y no cada una de sus partes."*

Análisis y Conclusión: Habiendo tomado conocimiento del descargo efectuado, se considera subsanado el incumplimiento sustancial.

*"4. **Incumplimiento de la Ley Provincial N.° 1015, Artículo 9°, Inciso g)**: no consta la razonabilidad de los valores de referencia proporcionados, ello en virtud de que los mismos se realizan sin brindar fuentes y referencias, no demuestran los cálculos involucrados en el valor de mercado proporcionados, se emiten sin marco normativo alguno lo que implica que no se respetan pautas objetivas, claras y homogéneas, entre otros aspectos que configuran conductas contrarias a las indicadas por este Tribunal de Cuentas en la Resolución Plenaria N.° 221/2023.".*

Descargo: *"Se procedió a solicitar intervención a la Dirección Provincial de Redeterminación de Precios y Precios de Referencia – M.EC., obrando Informe N° 2666/202 en contenido 55. Del mismo, se deduce que los precios facturados por la firma RAYUELA S.R.L., resultan razonables, dado que la diferencia con los montos proporcionados por el área mencionada, no supera el 20%.."*

Se incorpora a orden 53 Informe N.° 2666/2024 Letra: DPRPyPR-MEC., suscripta por el señor Lucas Román LIMA, Coordinador Provincial de Redeterminación de Precios y Precios de Referencia y el Lic. Miguel Ángel CALZADILLA SALAZAR

Análisis y Conclusión: vista la documentación incorporada, se considera que el presente apartamiento normativo podría considerarse subsanado en la presente instancia. No obstante, cabe resaltar que aún dicha área cuenta con un manual de procedimientos sobre la construcción de los valores de referencia informados.

*"5. **Incumplimiento de la Resolución Presidencia AITF N.° 233/2024**: atento a que no se respetó el procedimiento correspondiente tratándose de adquisición de equipamiento informático, en especial a fin de evaluarse técnicamente que lo adquirido sea lo correspondiente.".*

Descargo: *"Se informa que el pedido de los bienes fue realizado por el área técnica, según consta en Nota N° 59/2024 Letra SSD-SsIT, adunada a orden 50 (copia) y a orden 56.*

La misma no se incorporó anteriormente debido a que no le fue proporcionada a la persona que inició el trámite, ello por un error involuntario debido a que nos encontrábamos abocados a la resolución de la situación que estábamos atravesando.

Asimismo, puede observarse en remito incorporado en orden 48, la verificación técnica del Director Provincial de Soporte y Asistencia técnica, Sr. Francisco Nicolas Quinteros, dependiente de la Secretaría de Servicios Digitales.".

Análisis y Conclusión: Teniendo en cuenta la documental aportada, se da por subsanado el incumplimiento sustancial, dejando saber que para futuras actuaciones se deberá dar estricto cumplimiento a los momentos de intervención pautados por la norma citada, a los efectos de evitar nuevos incumplimientos.

4.2 Incumplimiento formal.

Se deja constancia de que el incumplimiento formal detectado, ha sido incorporado en el Registro previsto en la Resolución Plenaria N.° 122/2018 - Anexo I, Acápite 1, Punto 1.1.1.

Incumplimiento Formal: ***"Incumplimiento a lo establecido en el Decreto Reglamentario N.° 1122/2002 – Anexo I, Artículo 31°, Punto 2),*** *dado que las imputaciones presupuestarias, en sus distintas etapas de ejecución del gasto, se llevaron a cabo de manera extemporánea."*

4.3 Requerimientos:

Se deja constancia de que requerimiento formulado ha sido cumplimentado mediante el descargo efectuado por la N-SGPFyT-AIF-400-2024.

5. Conclusión

En virtud de lo expuesto en el apartado *"4. Análisis"*, donde se expone puntualmente cada uno de los incumplimientos normativos, con su descargo y análisis respectivo, se resumen las conclusiones obtenidas.

Respecto al incumplimiento que no ha sido subsanado, se elevan las actuaciones de referencia en el marco del punto 1.4.2. del Anexo I de la Resolución Plenaria N.° 122/2018 y se informan los siguientes puntos:

Normativa incumplida:

- Ley Provincial N.° 1015, Artículos 7°, 14° y subsiguientes.
- Ley Provincial N.° 141, Artículo 99°, Inciso a), y Artículo 100°.

Actos administrativos:

- **Resolución Presidencia AITF N.° 361/2024:** reconoce el gasto en concepto de la adquisición de Discos Rígidos y SSD para ser utilizados en el Servidor de Almacenamiento en la Red. Firmado digitalmente por CUBINO Analía Inés.
- **Resolución SA-AITF N.° 294/2024:** aprueba el gasto derivado de la Factura tipo "B" N.° 0050-00331960 por la suma de $7.549.900,99 en concepto de la adquisición de Discos Rígidos y SSD para ser utilizados en el Servidor de Almacenamiento en la Red. Ordena pagar la suma mencionada al proveedor RAYUELA SRL. Firmado digitalmente por ARROYO Mariángeles.

Agentes y/o funcionarios responsables:

- Presidenta de la Agencia de Innovación, D.I. Analía Inés CUBINO: quien suscribió el acto administrativo de reconocimiento de gastos, teniendo conocimiento que se obstó del correspondiente procedimiento administrativo.
- Secretaria Administrativa – AITF, Abog. Mariángeles ARROYO: quien suscribió el acto administrativo que aprueba el gasto y autoriza el pago sin que previamente se haya acreditado la efectiva entrega de los bienes.

Presunto perjuicio fiscal:

Se deja constancia de que el incumplimiento sustancial detectado, no resulta suficiente para cuantificar un posible perjuicio al erario provincial en esta instancia.

Sin otro particular elevo a su consideración un ejemplar del presente informe el que consta a orden 58 del expediente de la referencia.

C.P. Leonardo VIVAS AHUMADA
Auditor Fiscal
Tribunal de Cuentas de la Provincia

Firmado Electrónicamente por
CONTADOR VIVAS AHUMADA LEONARDO
Tribunal de Cuentas
AUDITOR FISCAL
16/12/2024 10:58

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

"2024 - 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

(DICTAMEN LEGAL) N.° DICT-SL-AL-215-2024

Ref.: (Expte N° 58790/2024 Letra: AIF-E- "*S/ RECONOCIMIENTO DE GASTO A FAVOR DEL PROVEEDOR RAYUELA S.R.L CUIT N° 30-70880385-1 EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE DISCOS RÍGIDOS Y SSD PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN LA RED - AGENCIA DE INNOVACIÓN TDF*")

lunes 30 de diciembre de 2024

Dictamen Legal
Letra: TCP-AL
Cde.: Expte N° 58790/2024
Letra: AIF-E-

Ushuaia, 30 de diciembre de 2024.

AL SECRETARIO LEGAL A/C
DE LA SECRETARÍA LEGAL
DR. PABLO E. GENNARO

Viene a esta Asesoría Letrada, el Expediente del corresponde perteneciente al registro de la Agencia de Innovación Fueguina, caratulado: "*S/ RECONOCIMIENTO DE GASTO A FAVOR DEL PROVEEDOR RAYUELA S.R.L CUIT N° 30-70880385-1 EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE DISCOS RÍGIDOS Y SSD PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN LA RED - AGENCIA DE INNOVACIÓN TDF*", a fin de tomar intervención.

ANTECEDENTES

Por Informe Contable N° INF-TCP-SC-297-2024 el Auditor Fiscal C.P. Leonardo VIVAS AHUMADA, en el apartado "*Antecedentes*", indicó que: "*Mediante el expediente de la referencia se ha tramitado el reconocimiento de gastos por la adquisición de Discos rígidos y SSD para ser utilizados en el Servidor de Almacenamiento en la Red de la Agencia de Innovación* (...)".

Por su parte, en el apartado *"Análisis"* efectuó cinco (5) Incumplimientos de Carácter Sustancial.

El primero de ellos, consistió en un ***"Incumplimiento de la Ley Provincial N° 1015, Artículos 7°, 14° y subsiguientes; y Ley Provincial N° 141, Artículo 100:*** *atento a la falta de tramitación de un procedimiento de selección del proveedor, conducta contraria a los principios de juridicidad, concurrencia, igualdad, transparencia y publicidad que deben preservarse en todas las contrataciones públicas.*

Es importante destacar que el presente apartamiento y la omisión denotada, vician los actos administrativos involucrados que afectan a la forma, elemento esencial para la validez de todo contrato administrativo.

Otro aspecto de suma importancia prevista en la doctrina y jurisprudencia en la materia sugiere que el reconocimiento del gasto debe limitarse al monto del empobrecimiento, cubriendo los gastos desembolsados y retribuciones de los servicios prestados, descontada la supuesta ganancia. Esto significa, que únicamente se cancelan los costos que irrigo la realización de la prestación, mas no cualquier ganancia que se haya generado; aspecto que no ha sido abordado en las presentes actuaciones, procediéndose a conformar y disponer la cancelación total de las facturas, sin ningún tratamiento sobre este aspecto. Además, tampoco se realiza un examen exhaustivo de los valores que se le reconoce al proveedor, teniendo en consideración que los Informes en la materia, no brindan fuentes y referencias, no demuestran los cálculos involucrados en el valor de mercado proporcionados, se emiten sin marco normativo alguno lo que implica que no se respetan pautas objetivas, claras y homogéneas, entre otros aspectos que configuran conductas contrarias a las indicadas por este Tribunal de Cuentas en la Resolución Plenaria N.° 221/2023. Por último, es importante mencionar que la falta de identificación de los

responsables de esta irregularidad afecta negativamente la correcta utilización de los fondos públicos. La opacidad en la gestión y la ausencia de responsabilidad pasibles de penalidades impiden una rendición de cuentas efectiva y pueden facilitar practicas lesivas a la confianza de la ciudadanía en la administración pública y en la eficiencia en el uso de los recursos del Estado".

El Incumplimiento Sustancial N° 2, resultó en un apartamiento al Decreto provincial N.° 674/2011 - Anexo I, Artículo 34, Punto 79 y a la Resolución CGP N.° 43/2022 - Anexo I, Punto C, en razón de que: "(...) *si bien consta la factura y nota de conformidad, al tratarse del pago correspondiente a un enriquecimiento sin causa, la simple conformidad de los funcionarios/agentes acerca de la prestación del servicio, sin ningún tipo de acreditación, no resulta suficiente para dar por válida y recibida la supuesta recepción de los bienes adquiridos, máxime que los mismos no cuentan con cargo patrimonial".*

Por su parte, el Incumplimiento Sustancial N° 3 fue el siguiente: *"**Incumplimiento Disposición DGP N.° 01/2021 Artículo 3°:** atento a que la Resolución SA-AITF N.° 294/2024 que aprueba el gasto, imputa el mismo al Inciso 20000, no siendo congruente la imputación con la naturaleza de los bienes adquiridos, la cual se define en el Artículo 3° de la Disposición DGP N.° 01/2021. Respectivamente, teniendo en cuenta que se trata de bienes inventariables, corresponde registrar las altas patrimoniales y sus respectivos Cargos Patrimoniales, situación que no se ve reflejada en las actuaciones".*

También, el Auditor Fiscal advirtió un *"**Incumplimiento de la Ley Provincial N.° 1015, Articulo 9°, Inciso g):** no consta la razonabilidad de los valores de referencia proporcionados, ello en virtud de que los mismos se realizan sin brindar fuentes y referencias, no demuestran los cálculos involucrados en el*

valor de mercado proporcionados, se emiten sin marco normativo alguno lo que implica que no se respetan pautas objetivas, claras y homogéneas, entre otros aspectos que configuran conductas contrarias a las indicadas por este Tribunal de Cuentas en la Resolución Plenaria N.° 221/2023".

Finalmente, el Incumplimiento Sustancial N° 5 consistió en un "***Incumplimiento de la Resolución Presidencia AITF IV.° 233/2024:*** *atento a que no se respetó el procedimiento correspondiente tratándose de adquisición de equipamiento informático, en especial a fin de evaluarse técnicamente que lo adquirido sea lo correspondiente".*

Dichos incumplimientos, fueron advertidos a través del Acta N° ACTA-POST-PE-346-2024, que dio lugar al descargo formulado por la Secretaria de Gestión, Polos y Fábricas de Talentos –A.I.T.F.- Ema BEJARANO, a través de la Nota N-SGPFyT-AIF-400-2024.

Así, respecto del Incumplimiento Sustancial N° 1, indicó que: "(…) *La falta de incumplimiento respecto a un procedimiento de compra según la normativa vigente, se debió a la necesidad y urgencia de contar con los discos solicitados por el área técnica, ya que nos encontrábamos en una compleja situación de vulnerabilidad de los sistemas del Gobierno y datos almacenados, ello en consecuencia del ataque cibernético sufrido a fines del mes de junio, siendo los bienes aquí tramitados, fundamentales para una rápida y eficiente solución; proporcionando además este tipo de discos, diferentes a los tradicionales, mayor confiabilidad".*

Por su parte, de los Incumplimientos Sustanciales N° 2, 3, 4 y 5, dijo que: "(…) **2.** *Se incorpora en orden 48, remito de los bienes recibidos con la correspondiente verificación del área técnica. Cabe aclarar que no fue adjuntado en su momento por desconocimiento de la persona encargada de iniciar el trámite.*

3. Al respecto obra respuesta del Subsecretario de Infraestructura Tecnológica, Sr. Rodrigo Fernando Cores, en orden 53, quien expone la imposibilidad de matrimoniar los bienes adquiridos, debido a que los mismos son componentes de un servidor informático, correspondiendo patrimoniar el servidor y no cada una de sus partes.

4. Se procedió a solicitar intervención a la Dirección Provincial de Redeterminación de Precios y Precios de Referencia – M.EC., obrando Informe N° 2666/202 en contenido 55. Del mismo, se deduce que los precios facturados por la firma RAYUELA S.R.L., resultan razonables, dado que la diferencia con los montos proporcionados por el área mencionada, no supera el 20%.

5. Se informa que el pedido de los bienes fue realizado por el área técnica, según consta en Nota N° 59/2024 Letra SSD-SsIT, adunada a orden 50 (copia) y a orden 56.

La misma no se incorporó anteriormente debido a que no le fue proporcionada a la persona que inició el trámite, ello por un error involuntario debido a que nos encontrábamos abocados a la resolución de la situación que estábamos atravesando.

Asimismo, puede observarse en remito incorporado en orden 48, la verificación técnica del Director Provincial de Soporte y Asistencia técnica, Sr. Francisco Nicolás Quinteros, dependiente de la Secretaría de Servicios Digitales".

En consecuencia, analizado el Descargo, en el Informe N° INF-TCP-SC-297-2024, se concluyó lo siguiente: "**<u>Incumplimiento Sustancial N° 1:</u>** (…)

Habiéndose tomado conocimiento de lo planteado por la Secretaria de Gestión Polos y Fabricas de Talentos, Ema L. BEJARANO, cabe aclarar que los argumentos no son suficientes para considerar subsanado el apartamiento normativo verificado, ya que la figura de reconocimiento de gastos y su cancelación vía legitimo abono no es un procedimiento normado, siendo una práctica grave que desvirtúa la finalidad de los procedimientos de contratación, afectando los principios de transparencia y eficiencia".

Por su parte los **Incumplimientos Sustanciales N° 2, 3, 4 y 5**, fueron considerados por el Auditor Fiscal, subsanados.

Respecto de los agentes y funcionares responsables, indicó que serían: *"Presidenta de la Agencia de Innovación, D.I. Analía Inés CUBINO: quien suscribió el acto administrativo de reconocimiento de gastos, teniendo conocimiento que se obsto del correspondiente procedimiento administrativo.*

Secretaria Administrativa — AITF, Abog. Mariángeles ARROYO: quien suscribió el acto administrativo que aprueba el gasto y autoriza el pago sin que previamente se haya acreditado la efectiva entrega de los bienes".

Finalmente, por Nota Interna Nº NOTA-INT-SC-2096-2024, se remitieron las actuaciones a esta Secretaría Legal a fin de expedirse sobre los puntos allí informados y todo lo que se estime corresponder, en forma previa a la intervención de la Secretaría Contable.

ANÁLISIS

En primer lugar, cabe tener presente que las actuaciones ingresaron a esta Secretaría Legal en el marco del Control Posterior, aplicándose así la Resolución Plenaria N° 122/2018 que aprueba el procedimiento respectivo.

Esta, en sus considerandos indica: "(...) *Que este tipo de control, se vincula con el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial y el ejercicio de la potestad sancionatoria* (...)".

Además, en su parte pertinente reza: "(...) ***1.1.1 Incumplimientos formales:*** *Son aquellos incumplimientos administrativos que por sí mismos no constituyen perjuicio al erario público provincial* (...). ***1.1.2 Incumplimientos sustanciales:*** *Se vinculan con incumplimientos y faltas graves que podrían traer aparejado un perjuicio al erario público o un grave apartamiento normativo no incluido en* ***1.1.1.*** (...) ***1.4.2 No subsanación de deficiencias sustanciales:*** *En caso de que no se hubieran subsanado los incumplimientos administrativos advertidos en la Acta de Constatación del punto 1.3., el Auditor Fiscal elevará a la Secretaría Contable dentro del plazo de tres (3) días un Informe en donde expondrá de manera clara y fundada:* ***1.4.2.1 Distinción de incumplimientos formales y sustanciales:*** *Deberá diferenciar los incumplimientos formales de aquellos que revisten el carácter de sustanciales.* ***1.4.2.2 Normativa incumplida:*** *Indicar cuál es la norma o las normas transgredidas.* ***1.4.2.3 Acto Administrativo:*** *A través de qué actos y/u omisiones se produce la transgresión el incumplimiento y/o daño.* ***1.4.2.4 Agentes responsables:*** *Indicar quién/es es/son el/los agente/s o funcionario/s responsable/s en función de las actuaciones*".

Antes de proceder al análisis particular de los Incumplimientos Sustanciales, estimo correspondería determinar las pautas temporales para la aplicación de eventuales sanciones por parte de este Tribunal.

Sobre este punto, "(...) *cabe destacar que la potestad sancionatoria de este Órgano de Control, encuentra su fundamento en la necesidad de cumplimentar con su cometido sobre los organismos que se encuentran bajo su fiscalización (conf. Superior Tribunal de Justicia en 'Aguirre' y 'Toledo Zulmelzu').*

Conforme los lineamientos seguidos por el Superior Tribunal de Justicia, en el fallo 'Blazquez, Daniel c/ Tribunal de Cuentas de la Provincia s/ Contencioso Administrativo', se sienta el criterio relativo a fijar el dies a quo de la potestad sancionatoria, a partir del día siguiente de la publicación del acto o del ingreso de las actuaciones a este Órgano de Control, lo que suceda primero en el tiempo.

Asimismo, en los autos caratulados: 'Tribunal de Cuentas c/ Santamaría, Felix Alberto si Ejecutivo', del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial Sur, se fijó la pauta en función de la cual el plazo del artículo 75 era aplicable no sólo para la acción de responsabilidad patrimonial, sino también para la aplicación de multas a los agentes estatales, toda vez que ambos supuestos se desprenden de la interpretación del artículo 44 de la citada ley.

La mentada jurisprudencia fue adoptada por el Cuerpo de Miembros de este Tribunal de Cuentas mediante el Acuerdo Plenario N° 1744 (...)" (Informe Legal N.° 192/2021 Letra: TCP-CA).

Así, teniendo en cuenta que el ingreso de las actuaciones a este Organismo -conforme surge del sistema GEN EXPEDIENTE- ocurrió el 23 de octubre de 2024, aún no se encontrarían excedidas las pautas temporales para ejercer las atribuciones conferidas por la Ley provincial N.° 50.

Máxime, en razón de que la Resolución S.A.-A.I.T.F. N° 294/2024 (que aprueba el gasto y ordena pagar –orden 34) fue suscripta el 31 de julio de 2024, por lo que incluso tomando como fecha la publicación del mentado acto administrativo (que nunca puede ser anterior a su suscripción), no se modificaría lo afirmado en el apartado anterior.

Dicho esto, en el supuesto en particular y conforme lo analizado en el Informe N.° INF-TCP-SC-297-2024, nos hallamos frente a cinco (5) Incumplimientos de carácter Sustancial, de los cuales cuatro (4) –Incumplimientos Sustanciales N°2, 3, 4 y 5- fueron subsanados por lo que me limitaré a examinar sólo el Incumplimiento Sustancial N° 1.

El **Incumplimiento Sustancial N° 1** dice: *"**Incumplimiento de la Ley Provincial N° 1015, Artículos 7°, 14° y subsiguientes; y Ley Provincial N° 141, Artículo 100:** atento a la falta de tramitación de un procedimiento de selección del proveedor, conducta contraria a los principios de juridicidad, concurrencia, igualdad, transparencia y publicidad que deben preservarse en todas las contrataciones públicas.*

Es importante destacar que el presente apartamiento y la omisión denotada, vician los actos administrativos involucrados que afectan a la forma, elemento esencial para la validez de todo contrato administrativo.

Otro aspecto de suma importancia prevista en la doctrina y jurisprudencia en la materia sugiere que el reconocimiento del gasto debe limitarse al monto del empobrecimiento, cubriendo los gastos desembolsados y retribuciones de los servicios prestados, descontada la supuesta ganancia. Esto significa, que únicamente se cancelan los costos que irrigo la realización de la prestación, mas no cualquier ganancia que se haya generado; aspecto que no ha sido abordado en las presentes actuaciones, procediéndose a conformar y disponer la cancelación total de las facturas, sin ningún tratamiento sobre este aspecto. Además, tampoco se realiza un examen exhaustivo de los valores que se le reconoce al proveedor, teniendo en consideración que los Informes en la materia, no brindan fuentes y referencias, no demuestran los cálculos involucrados en el valor de mercado proporcionados, se emiten sin marco normativo alguno lo que implica que no se respetan pautas objetivas, claras y homogéneas, entre otros aspectos que configuran conductas contrarias a las indicadas por este Tribunal de Cuentas en la Resolución Plenaria N.° 221/2023. Por último, es importante mencionar que la falta de identificación de los responsables de esta irregularidad afecta negativamente la correcta utilización de los fondos públicos. La opacidad en la gestión y la ausencia de responsabilidad pasibles de penalidades impiden una rendición de cuentas efectiva y pueden facilitar practicas lesivas a la confianza de la ciudadanía en la administración pública y en la eficiencia en el uso de los recursos del Estado".

En primer lugar, se comparte el criterio vertido por el Auditor Fiscal respecto de la falta de tramitación de un procedimiento administrativo, lo que fue aceptado por la Secretaria de Gestión Polos y Fábricas de Talentos de la Agencia de Innovación Fueguina, Ema Leandra BEJARANO a través de la NOTA-N-SGPFyT-AIF-400-2024, en que manifestó lo siguiente: "*La falta de incumplimiento respecto a un procedimiento de compra según la normativa vigente, se debió a la necesidad y urgencia de contar con los discos solicitados por el área técnica, ya que nos encontrábamos en una compleja situación de*

vulnerabilidad de los sistemas del Gobierno y datos almacenados, ello en consecuencia del ataque cibernético sufrido a fines del mes de junio, siendo los bienes aquí tramitados, fundamentales para una rápida y eficiente solución; proporcionando además este tipo de discos, diferentes a los tradicionales, mayor confiabilidad" (el resaltado me pertenece).

Entonces, reconocida la falta por el cuentadante, entiendo en esta instancia, que no resultaría necesario mayor análisis sobre esta temática.

Ahora, en relación a la figura del Reconocimiento del Gasto, este Tribunal de Cuentas, se ha pronunciado sobre el pago realizado por el Estado provincial de prestaciones recibidas sin haberse llevado a cabo el procedimiento requerido por la norma, remarcado lo esencial del elemento forma y la posibilidad de que, ante la inexistencia de este, se reconozca el derecho del proveedor con fundamento en la teoría del enriquecimiento sin causa.

En este supuesto en particular, se abonó una factura en concepto de la adquisición de Discos Rígidos y SSD para ser utilizados en el Servidor de Almacenamiento en la Red de la Agencia de Innovación Fueguina, a la firma RAYUELA S.R.L., sin haberse llevado a cabo un procedimiento de contratación para seleccionar al proveedor.

Lo anterior, conforme surge de la Nota Fundada N° 155/2024 Letra: S.G.P. y F.T - A.I.T.F., suscripta por la Secretaria de Gestión Polos y Fabrica de Talentos Agencia de Innovación, Ema BEJARANO, en razón de que "*Recientemente, la Agencia de Innovación de la Provincia sufrió un ataque de gran amplitud, causando así, la caída de gran parte de nuestros sistemas. Este*

incidente deshabilito nuestras capacidades operativas comprometiendo la disponibilidad de los servicios y la integridad de los datos almacenados.

Dichos ataques han provocado fallos en el hardware existente y han resaltado la necesidad de mejorar nuestra infraestructura. La implementación de discos adicionales permita configurar esquemas de redundancia (RAID), mejorando así la integridad y seguridad de los datos almacenados y reduciendo la vulnerabilidad ante ataques futuros.

Los discos SATA de 16TB proporcionarán la capacidad necesaria para manejar el creciente volumen de datos, colaborando con el sistema de respaldo de datos actual; mientras que los discos SSD mejorarán el rendimiento del sistema operativo de nuestro NAS, debido a su alta velocidad de lectura/escritura, lo que garantiza un arranque rápido y un funcionamiento eficiente del sistema, siendo además menos propenso a fallos mecánicos comparados con los discos duros tradicionales, lo que asegura mayor confiabilidad y tiempo de actividad del sistema (...)".

En este sentido, el Tribunal de Cuentas, por Resolución Plenaria N° 126/2022 -entre otras- dijo: "(...) *la Constitución de la Provincia determina en su artículo 74 que: 'Las contrataciones del Estado Provincial o de los municipios se efectuarán según sus leyes u ordenanzas específicas en la materia, mediante el* ***procedimiento de selección y una previa, amplia y documentada difusión****' (el resaltado me pertenece).*

Siendo el procedimiento adecuado la licitación pública o privada, ante la exigencia de la norma, la doctrina imperante sobre el tema es constante respecto a los supuestos excepcionales en los cuales se prescinde de ella para contratar en forma directa, solicitando: '(...) el dictado de un acto administrativo motivado en el que se consignen, con sustento fáctico y jurídico suficiente, las

razones que inducen a acudir a él (...)' (REITMAN FARAH, Mario, Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, Abeledo Perrot, Buenos Aires, págs. 57y 61).

Este extremo no se encuentra acreditado, en violación evidente de los principios consagrados por el artículo 3° de la Ley provincial N° 1015, que son aplicables tanto a los contratos administrativos originados en un proceso de licitación como a los nacidos de una contratación directa.

Como contraparte, el régimen actual de contrataciones públicas ha consagrado como principio de todo contrato administrativo la responsabilidad del funcionario público. 'Corresponderá entonces, en los casos de habilitarse contrataciones que omiten la observancia de algún principio -como ocurre con la concurrencia, la competencia y la igualdad en la contratación directa- darle mayor peso a la responsabilidad para, de esa manera, equilibrar la balanza' (Jorge ALBERTSEN, 'Cuestiones de la Contratación Directa' en Cuestiones de Contratos Administrativos en Homenaje a Julio Rodolfo COMADIRA, Ediciones Rap, págs. 535/537).

En función de tales preceptos doctrinarios y la normativa aplicable, cabe concluir que la falta de contratación previa no exime totalmente a la Administración de la obligación de pago, aunque sí procede equilibrar la gravedad de las violaciones a los principios rectores de las contrataciones del Estado, a través del reproche debido a los funcionarios responsables de tales conductas.

Por lo expuesto, dichos pagos tendrán su fundamento en la figura del enriquecimiento sin causa y no en un vínculo contractual.

El fundamento de ello es que la Administración no podría enriquecerse ilegítimamente de una prestación percibida -aún en el marco de la irregularidad en la que fue desarrollada la contratación- y no el reconocimiento del gasto, que no encuentra amparo normativo alguno, ni posee la virtualidad suficiente para subsanar lo actuado (conf. Acuerdos Plenarios N° 2354 y 2370, entre otros) (…)" (el subrayado no se corresponde al original).

Además, respecto de la Teoría del Enriquecimiento Sin Causa, este Tribunal ha sostenido que: "(…) *la Doctrina tiene dicho que: '(...) 6.3. Caso 'Ingeniería Omega': el enriquecimiento sin causa como fuente de la obligación*

La última sentencia del año 2000 trajo novedades en la materia, pues, además de tratarse la inexistencia del contrato, se hizo mención a la posibilidad de reconocer el derecho del contratista con fundamento en la teoría del enriquecimiento sin causa.

La Cámara Civil había confirmado un fallo de primera instancia que condenó al actual Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al pago de una suma de dinero por los trabajos, reparaciones y suministros efectuados por la actora en el Hospital Cosme Argerich. Fundamentó la procedencia de ese pago en la teoría del enriquecimiento sin causa.

(...) sería dable inferir de este precedente que si el contratista sostuviere como fuente de su derecho el enriquecimiento sin causa, debería iniciar una acción específicamente destinada a probarlo (y no una de cobro de pesos o reconocimiento de derechos emanados del contrato, pues éste no existe) o bien, al menos, invocar en subsidio el enriquecimiento en la acción por incumplimiento contractual, con la carga de acreditar tanto el enriquecimiento del contratante como el empobrecimiento propio.

Merece recordarse, a efectos de ubicarnos sumariamente en el instituto del enriquecimiento sin causa, que la doctrina privatista ha reconocido que éste es fuente de obligaciones y fundamentos de la acción por restitución; que no es admisible cuando la ley otorga al empobrecido otros medios para ser indemnizado y que son requisitos indispensables para su procedencia: a) el enriquecimiento del demandado, b) el empobrecimiento del actor, c) el nexo causal entre empobrecimiento y enriquecimiento y d) la falta de causa lícita que justifique el enriquecimiento. Asimismo, el límite de la restitución viene dado por el enriquecimiento o por el empobrecimiento, el que resulte menor.

(...) Como es dable observar, el enriquecimiento sin causa constituye una fuente de obligaciones de carácter subsidiario o residual, por lo que el actor no debe contar con otro medio o acción para obtener la indemnización. Además, en el plano sustancial, exige acreditar el enriquecimiento, el empobrecimiento y la relación de causalidad, alcanzando la restitución sólo al que resulte menor.

Por último, a nuestro juicio es razonable el requisito de la ausencia de mala fe o culpa en el empobrecido, aunque estimamos que la presunción de conocimiento del vicio debe ser solo iuris tantum y refutable por prueba en contrario.

Entendemos que no es dable, pues, predicar una ecuación necesaria entre la condición de contratista y la de especialista en el conocimiento de los trámites y procedimientos estatales, dependiendo ello de factores diversos que deberán ser sopesados en cada caso por los tribunales. (...)' [CANDA, Fabián O., 'La importancia del elemento forma en el contrato administrativo (Consecuencias de su omisión en la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación)', en la obra

colectiva Cuestiones de Contratos Administrativos, en Homenaje a Julio Rodolfo Comadira, Jornadas organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Ed. RAP, Buenos Aires, 2007-].

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el servicio fue prestado efectivamente, conforme las constancias que obran en cada uno de los expedientes por esa razón aún cuando no existe contratación previa, de todas maneras correspondería efectuar el pago en función de la teoría del enriquecimiento sin causa.

En referencia a ello, mediante Acuerdo Plenario 2370 se dijo: 'en relación con la procedencia de los pagos cuando de las actuaciones surgiesen verificadas las prestaciones, aun en el supuesto de la inexistencia de contrato, con base a la figura del enriquecimiento sin causa en favor del Estado, este Organismo de Control se ha expedido a través de la Resolución Plenaria N° 226/12, en que se indicó:

'En relación con la figura del enriquecimiento sin causa en el marco de los contratos administrativos y su relación con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en sus precedentes, entre ellos, la causa 'Ingeniería Omega', cabe hacer referencia a la exposición realizada por la Dra. Laura MONTI (Procuradora ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación) en el marco de las XXIII Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo celebradas en la ciudad de Mendoza en el año 2007, quien al respecto (...) hizo referencia a una causa más reciente 'Cardiocorp' indicando al respecto que: 'la Corte en su composición actual tuvo opiniones divergente sobre el tema, a saber: a) corresponde pagar a quien realizó prestaciones a la Administración sobre la base del enriquecimiento sin causa; b) debe seguirse, en lo sustancial, la jurisprudencia que surge del caso 'Ingeniería Omega'; c) la sentencia de cámara que reconoció la responsabilidad estatal con base en la institución citada queda firme, por

aplicación de la fórmula del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación'.

De lo expuesto se deduce, como señalamos al principio, que la Corte sigue considerando que es posible fundar una acción de responsabilidad estatal en el enriquecimiento sin causa de los órganos públicos'.

Una vez sentado ello, señaló: '...Este reconocimiento no implicará eludir sino, antes bien, sancionar a los funcionarios que, eventualmente, pueden haber intervenido ...'

Así las cosas, en base al análisis efectuado, resulta dable concluir que resulta viable cancelar el pago en favor de los particulares cuando, a pesar de no haberse suscripto un convenio, resulte acreditada la efectiva contraprestación en favor de la Administración. Sin embargo dichos pagos tendrán su fundamento en la figura del enriquecimiento sin causa y no en un vínculo contractual' (...)" (el subrayado no se corresponde con el original).

El en caso bajo análisis, parecería ser que el servicio efectivamente se habría prestado -conforme las constancias que obran en el expediente y corroborado por el Auditor Fiscal al tener por subsanado el Incumplimiento Sustancial N° 2-, por lo que, aun habiéndose llevado a cabo sin seguir el procedimiento de contratación estipulado en la norma, entiendo que correspondería enmarcar el pago realizado al proveedor *"RAYUELA S.R.L."*, en la teoría del enriquecimiento sin causa.

Además, de los antecedentes surge acreditada *prima facie*, la premura en la Agencia de Innovación Fueguina de contar con los insumos ante las

situaciones acontecidas en dicha repartición, cual fue, el ataque cibernético sufrido que generó una situación de vulnerabilidad de los sistemas del Gobierno y datos almacenados.

Tal se desprende de la Nota N° 59/2024 Letra: SSD-SsIT (orden 50) en dicho ataque "(...) *se vieron comprometidos gran parte de los servicios suministrados por esta Secretaría, reduciendo nuestras capacidades operativas, y provocando fallos en nuestro hardware actual, más precisamente en nuestro servidor NAS (Servidor de Almacenamiento en la red) quedando inoperativo* (...)".

Por lo que amén de verificarse la falta de procedimiento de contratación, esta situación imprevisible acaecida con las consecuencias que generó, sumado a la rápida respuesta del proveedor ante esta situación de crisis, teniendo en cuenta que muchos servicios esenciales dependen del sistema informático, entiendo que por razones de equidad correspondería pagar su totalidad y no sólo el empobrecimiento del proveedor.

En virtud de lo expuesto precedentemente, se comparte el criterio vertido en el Informe Contable N.° INF-TCP-SC-297-2024, en el que se concluyó que el incumplimiento normativo detectado, "(...) *no resulta suficiente para cuantificar un posible perjuicio al erario provincial en esta instancia*".

Finalmente, se sugiere que, en caso de compartir el Cuerpo Plenario de Miembros el criterio aquí vertido, y en el marco de las facultades del artículo 4° inciso g) de la Ley provincial N° 50, se ponga en conocimiento de lo aquí analizado a las autoridades correspondientes, a fin de que en el futuro eviten incurrir en apartamientos normativos como los advertidos en las presentes actuaciones.

CONCLUSIÓN

Como corolario de lo expuesto, respecto del Incumplimiento Sustancial N° 1, se comparte el criterio vertido por el Auditor Fiscal interviniente sobre la falta de tramitación de un procedimiento de selección del proveedor del servicio.

Así, en base a la normativa, la Doctrina y la Jurisprudencia arriba analizada, dado que de las constancias obrantes en el expediente y de lo actuado por el Auditor Fiscal al tener por subsanado el Incumplimiento Sustancial N° 2, se desprende que el servicio se habría prestado, se comparte el criterio vertido en el Informe Contable N° INF-TCP-SC-297-2024, correspondiendo encuadrar el pago realizado al proveedor *"RAYUELA S.R.L."*, en la teoría del enriquecimiento sin causa.

Además, de los antecedentes surge acreditada *prima facie*, la premura en la Agencia de Innovación Fueguina de contar con los insumos ante las situaciones acontecidas en dicha repartición, cual fue, el ataque cibernético sufrido que generó una situación de vulnerabilidad de los sistemas del Gobierno y datos almacenados.

Por ello, amén de verificarse la falta de procedimiento de contratación, esta situación imprevisible acaecida con las consecuencias que generó, sumado a la rápida respuesta del proveedor ante esta situación de crisis, teniendo en cuenta que muchos servicios esenciales dependen del sistema informático, entiendo que por razones de equidad correspondería pagar su totalidad y no sólo el empobrecimiento del proveedor.

Finalmente, atento a lo indicado por el Auditor Fiscal interviniente, quien concluyó en el Informe Contable N.° INF-TCP-SC-297-2024 que el incumplimiento normativo detectado "(...) *no resulta suficiente para cuantificar un posible perjuicio al erario provincial en esta instancia*", se sugiere que, en caso de compartir el Cuerpo Plenario de Miembros el criterio aquí vertido y en el marco de las facultades del artículo 4° inciso g) de la Ley provincial N° 50, se ponga en conocimiento de lo aquí analizado a las autoridades correspondientes, a fin de que en el futuro eviten incurrir en apartamientos normativos como los advertidos en las presentes actuaciones.

Sin otras consideraciones, se giran las presentes para la continuidad del trámite.

Dra. María Belén URQUIZA
Asesora Letrada
Tribunal de Cuentas de la Provincia

Reporte de Instrumentos Jurídicos y voces al 30-12-2024

Tipo-Nro-Año-Letra	Proc. de Int.	Carátula del Expte. o Asunto Nota	Categoría	Voces	Res. que aprueba	Res. Compartida?
dictamen-215/2024 TCP-AL	Control Posterior - RP 122/2018	Expte N° 58790/2024 Letra: AIF-E- "S/ RECONOCIMIENTO DE GASTO A FAVOR DEL PROVEEDOR RAYUELA S.R.L CUIT N° 30-70880385-1 EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE DISCOS RÍGIDOS Y SSD PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN LA RED - AGENCIA DE INNOVACIÓN TDF"	Ley Provincial N° 495	Reconocimiento de gasto - Legítimo abono Reconocimiento de Gasto		C.P.: S.L.: C.S.L.: Pro.L.:

Dra. María Belén URQUIZA
Asesora Letrada
Tribunal de Cuentas de la Provincia

Firmado Electrónicamente por
ABOGADA URQUIZA MARIA BELEN
Tribunal de Cuentas
ASESORA LETRADA
30/12/2024 15:11

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

"2025 – 60° ANIVERSARIO DE LA RESOLUCIÓN 2065 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS"

Informe Contable N.° INF-TCP-SC-12-2025

Ref.: EXPTE AIF-E-58790-2024

Ushuaia, miércoles 5 de febrero de 2025

INFORME CONTABLE
Control Posterior

INFORME CONTABLE 2025

Letra: TCP-SC

REF.: AIF-E-58790-2024, caratulado: *"Reconocimiento de gasto a favor del proveedor RAYUELA S.R.L CUIT N° 30-70880385-1 en concepto de adquisición de Discos rígidos y SSD para ser utilizados en el Servidor de Almacenamiento en la Red - Ag..."*

MONTO: $ 7.549.900,00

ÁREA GENERADORA: Secretaría de Gestión Polos y Fábricas de talentos – AITF.

Ushuaia, 05 de febrero de 2025

Control Posterior

Índice

1. **Destinatario** 1
2. **Objeto** 1
3. **Antecedentes** 1
4. **Análisis y conclusión** 5

1. Destinatario

El presente informe se dirige al Sr. Vocal de Auditoría.

2. Objeto

Elevar el análisis efectuado, mediante el Informe Contable N.° INF-TCP-SC-297-2024 obrante en el expediente de la referencia suscripto por el Auditor Fiscal CP Leonardo VIVAS AHUMADA en el marco del Control Posterior, reglamentado mediante la Resolución Plenaria N.° 122/2018, en relación a lo actuado en las presentes actuaciones.

3. Antecedentes

A los efectos de no abundar y en honor a la brevedad, me remito a los antecedentes descriptos en el informe contable detallado en el título anterior. No obstante, se transcribe a continuación los incumplimientos sustanciales del expediente de la referencia, plasmados en el apartado IV – INCUMPLIMIENTO SUSTANCIAL del Acta de Constatación TCP N° ACTA-POST-PE-293-2024, *"(...)* ***1. Incumplimiento de la Ley Provincial N.° 1015, Artículos 7°, 14° y subsiguientes; y Ley Provincial N.° 141, Artículo 100:*** *atento a la falta de tramitación de un procedimiento de selección del proveedor, conducta contraria a los principios de juridicidad, concurrencia, igualdad, transparencia y publicidad que deben preservarse en todas las contrataciones públicas.*

Es importante destacar que el presente apartamiento y la omisión denotada, vician los actos administrativos involucrados que afectan a la forma, elemento esencial para la validez de todo contrato administrativo.

Otro aspecto de suma importancia prevista en la doctrina y jurisprudencia en la materia sugiere que el reconocimiento del gasto debe limitarse al monto del empobrecimiento, cubriendo los gastos desembolsados y retribuciones de los

servicios prestados, descontada la supuesta ganancia. Esto significa, que únicamente se cancelan los costos que irrigó la realización de la prestación, más no cualquier ganancia que se haya generado; aspecto que no ha sido abordado en las presentes actuaciones, procediéndose a conformar y disponer la cancelación total de las facturas, sin ningún tratamiento sobre este aspecto. Además, tampoco se realiza un examen exhaustivo de los valores que se le reconoce al proveedor, teniendo en consideración que los Informes en la materia, no brindan fuentes y referencias, no demuestran los cálculos involucrados en el valor de mercado proporcionados, se emiten sin marco normativo alguno lo que implica que no se respetan pautas objetivas, claras y homogéneas, entre otros aspectos que configuran conductas contrarias a las indicadas por este Tribunal de Cuentas en la Resolución Plenaria N.° 221/2023. Por último, es importante mencionar que la falta de identificación de los responsables de esta irregularidad afecta negativamente la correcta utilización de los fondos públicos. La opacidad en la gestión y la ausencia de responsabilidad pasibles de penalidades impiden una rendición de cuentas efectiva y pueden facilitar prácticas lesivas a la confianza de la ciudadanía en la administración pública y en la eficiencia en el uso de los recursos del Estado (...)", "(...) ***2. Incumplimiento del Decreto Provincial N.° 674/2011 - Anexo I, Artículo 34, Punto 79 y de la Resolución CGP N.° 43/2022 - Anexo 1, Punto C:*** *si bien consta la factura y nota de conformidad, al tratarse del pago correspondiente a un enriquecimiento sin causa, la simple conformidad de los funcionarios/agentes acerca de la prestación del servicio, sin ningún tipo de acreditación, no resulta suficiente para dar por válida y recibida la supuesta recepción de los bienes adquiridos, máxime que los mismos no cuentan con cargo patrimonial (...)", "(...)* ***3. Incumplimiento Disposición DGP N.° 01/2021 Artículo 3°:*** *atento a que la Resolución SA-AITF N.° 294/2024 que aprueba el gasto, imputa el mismo al Inciso 20000, no siendo congruente la imputación con la naturaleza de los bienes adquiridos, la cual se define en el Artículo 3° de la Disposición DGP N.° 01/2021. Respectivamente, teniendo en cuenta que se trata*

de bienes inventariables, corresponde registrar las altas patrimoniales y sus respectivos Cargos Patrimoniales, situación que no se ve reflejada en las actuaciones (...)", "(...) ***4. Incumplimiento de la Ley Provincial N.° 1015, Artículo 9°, Inciso g):*** *no consta la razonabilidad de los valores de referencia proporcionados, ello en virtud de que los mismos se realizan sin brindar fuentes y referencias, no demuestran los cálculos involucrados en el valor de mercado proporcionados, se emiten sin marco normativo alguno lo que implica que no se respetan pautas objetivas, claras y homogéneas, entre otros aspectos que configuran conductas contrarias a las indicadas por este Tribunal de Cuentas en la Resolución Ple-naria N.° 221/2023* (...)", y "(...) ***5. Incumplimiento de la Resolución Presidencia AITF N.° 233/2024:*** *atento a que no se respetó el procedimiento correspondiente tratándose de adquisición de equipamiento informático, en especial a fin de evaluarse técnicamente que lo adquirido sea lo correspondiente* (...)".

Posteriormente, regresan las actuaciones mediante N-SGPFyT-AIF-400-2024 del 03/12/2024 suscripta por la Secretaria de Gestión Polos y Fábricas de Talentos, Ema L. BEJARANO.

Tras los descargos efectuados se eleva a esta Secretaría Contable el informe contable precitado, informando la subsistencia del incumplimiento sustanciale N.° 1, y respecto de los señalados como N.° 2, N.° 3, N.° 4 y N.° 5 se consideran subsanados. Asimismo, en relación al incumplimiento formal N.° 1, el mismo ha sido incorporado en el Registro previsto en la Resolución Plenaria N.° 122/2018 - Anexo I, Acápite 1, Punto 1.1.1., y por último, el requerimiento ha sido cumlimentado.

Así las cosas, en el apartado 5. Conclusión del informe contable citado el profesional suscribiente se expresa en relación a la normativa incumplida, acto administrativo, agentes responsables y presunto perjucio fiscal.

Seguidamente, esta Secretaría Contable remitió las actuaciones a la Secretaría Legal de este Órgano de Control, mediante la Nota Interna Nº NOTA-INT-SC-2096-2024, agregada a orden 59, a los fines de que se expida sobre los puntos allí informados y todo lo que estime corresponder.

A continuación, se emitió el Dictamen Legal Nº DICT-SL-AL-215-2024, suscripto por el Dra María Belén URQUIZA, exponiendo en el apartado conclusión lo siguiente: "(...) *Como corolario de lo expuesto, respecto del Incumplimiento Sustancial N° 1, se comparte el criterio vertido por el Auditor Fiscal interviniente sobre la falta de tramitación de un procedimiento de selección del proveedor del servicio.*

Así, en base a la normativa, la Doctrina y la Jurisprudencia arriba analizada, dado que de las constancias obrantes en el expediente y de lo actuado por el Auditor Fiscal al tener por subsanado el Incumplimiento Sustancial N° 2, se desprende que el servicio se habría prestado, se comparte el criterio vertido en el Informe Contable N° INF-TCP-SC-297-2024, correspondiendo encuadrar el pago realizado al proveedor "RAYUELA S.R.L.", en la teoría del enriquecimiento sin causa.

Además, de los antecedentes surge acreditada prima facie, la premura en la Agencia de Innovación Fueguina de contar con los insumos ante las situaciones acontecidas en dicha repartición, cual fue, el ataque cibernético sufrido que generó una situación de vulnerabilidad de los sistemas del Gobierno y datos almacenados.

Por ello, amén de verificarse la falta de procedimiento de contratación, esta situación imprevisible acaecida con las consecuencias que generó, sumado a la rápida respuesta del proveedor ante esta situación de crisis, teniendo en cuenta que muchos servicios esenciales dependen del sistema informático, entiendo que por razones de equidad correspondería pagar su totalidad y no sólo el empobrecimiento del proveedor.

Finalmente, atento a lo indicado por el Auditor Fiscal interviniente, quien concluyó en el Informe Contable N.° INF-TCP-SC-297-2024 que el incumplimiento normativo detectado '(...) no resulta suficiente para cuantificar un posible perjuicio al erario provincial en esta instancia', se sugiere que, en caso de compartir el Cuerpo Plenario de Miembros el criterio aquí vertido y en el marco de las facultades del artículo 4° inciso g) de la Ley provincial N° 50, se ponga en conocimiento de lo aquí analizado a las autoridades correspondientes, a fin de que en el futuro eviten incurrir en apartamientos normativos como los advertidos en las presentes actuaciones (...)". (El subrayado me pertenece).

Asimismo, se agrego la Constancia de Notificación suscripta por el Dr. Pablo E. GENNARO, en su carácter de Secretario Legal, compartiendo el criterio vetido en el dictamen legal antes mencionado como también sus voces jurídicas.

4. Análisis y conclusión

Así las cosas, ante los hechos expuestos, y en atención al análisis realizado por las distintas áreas de este Organo de Control, esta instancia atento a lo indicado por la Secretaría Legal de este Organismo de Control y lo actuado mediante el informe contable antes citado, considera que subsiste el incumplimientos sustancial N.° 1 detectado en el expediente de la referencia.

Normativa incumplida:

- Ley Provincial N.° 1.015, Artículos 7°, 14 y subsiguientes.
- Ley Provincial N.° 141, Artículo 99, Inciso a), y Artículo 100.

Actos administrativos:

- Resolución Presidencia AITF N.° 361/2024: reconoce el gasto en concepto de la adquisición de Discos Rígidos y SSD para ser utilizados en el Servidor de Almacenamiento en la Red. Firmado digitalmente por la DI Analía Inés CUBINO.

• Resolución SA-AITF N.° 294/2024: aprueba el gasto derivado de la Factura tipo "B" N.° 0050-00331960 por la suma de $7.549.900,99 en concepto de la adquisición de Discos Rígidos y SSD para ser utilizados en el Servidor de Almacenamiento en la Red. Ordena pagar la suma mencionada al proveedor RAYUELA SRL. Firmado digitalmente por la Abogada Mariángeles ARROYO.

Agentes y/o funcionarios responsables:

• Presidenta de la Agencia de Innovación, D.I. Analía Inés CUBINO: quien suscribió el acto administrativo de reconocimiento de gastos, teniendo conocimiento que se obstó del correspondiente procedimiento administrativo.

• Secretaria Administrativa – AITF, Abog. Mariángeles ARROYO: quien suscribió el acto administrativo que aprueba el gasto y autoriza el pago sin que previamente se haya acreditado la efectiva entrega de los bienes.

Presunto perjuicio fiscal:

Se deja constancia de que el incumplimiento sustancial detectado, no re-sulta suficiente para cuantificar un posible perjuicio al erario provincial en esta instancia.

Sin otro particular, elevo a su consideración un ejemplar del presente informe junto al expediente de referencia, considerando que estarían dadas las condiciones, salvo mejor y elevado criterio del Cuerpo Plenario de Miembros, se sugiere que, efectuar en el marco de las facultades del artículo 4° inciso g) de la Ley provincial N.° 50, se ponga en conocimiento de lo aquí analizado a las autoridades correspondientes, a fin de que en el futuro eviten incurrir en apartamientos normativos como los advertidos en las presentes actuaciones.

Firmado Electrónicamente por
CONTADOR IRIGOITIA Mauricio
Tribunal de Cuentas
PROSECRETARIO CONTABLE
05/02/2025 14:59

Firmado Electrónicamente por
Sra. DUARTE Maria Mabel
Tribunal de Cuentas
SECRETARIA PRIVADA DEL CUERPO
PLENARIO DE MIEMBROS
13/02/2025 15:28